

ELECCIONES EN 2003. EL ALEJAMIENTO DE LAS URNAS

Jacqueline PESCHARD

SUMARIO: I. *Introducción*; II. *Factores técnicos detrás del abstencionismo*; III. *Factores políticos detrás del abstencionismo*; IV. *Factores político-culturales detrás del abstencionismo*.

I. INTRODUCCIÓN

No cabe duda que el dato más relevante de las elecciones intermedias de 2003 fue la caída en la participación electoral. Y esto es así no sólo por la reducida cifra de participación electoral, sino porque la democracia mexicana se estrenó hace apenas unos años, después de un largo y accidentado proceso de transición y porque estos comicios ocurrieron a la mitad del primer gobierno de alternancia en el Ejecutivo federal.

La asistencia a las urnas el 6 de julio de 2003 alcanzó apenas el 41.7% de los electores potenciales, lo cual representa la proporción más baja de participación de la historia contemporánea de México, que abarca desde 1946, en que se promulgó la primera ley electoral federal (cuadro 1). El dato es doblemente significativo, porque en buena parte de toda esta época no hubo certeza sobre las cifras de participación electoral, debido al control que tenía el poder sobre el escrutinio en los comicios.

Para ilustrar la caída de la participación del 2003, vale la pena tener en cuenta que los 26'968,371 electores que acudieron al llamado de las urnas es una cifra que apenas se acerca en números absolutos a la votación de 1991, cuando el padrón electoral con-

Cuadro 1. Evolución del abstencionismo*
1946-2003

<i>Año</i>	<i>Abstención %</i>
1946	13.6
1949	27.7
1952	25.5
1955	31.2
1958	28.4
1961	31.7
1964	33.4
1967	37.1
1970	35.7
1973	39.6
1976	38.0
1979	50.7
1982	33.2
1985	49.4
1988	52.6
1991	34.4
1994	22.8
1997	43.0
2000	36.8
2003	58.5

* Elecciones de diputados federales.

Fuentes: Periodo de 1946 a 1958, *Diario de Debates de la Cámara de Diputados*, y González Casanova, Pablo, *La democracia en México*, México, ERA, 1965; de 1961 a 1988, Gómez Tagle, Silvia, *Las estadísticas electorales de la reforma política*, México, El Colegio de México, 1990; de 1991 a 2000, *Atlas Electoral Federal de México 1991-2000*, México, Instituto Federal Electoral, 2000 (CD) y para 2003, Instituto Federal Electoral.

taba únicamente con 36'376,167 ciudadanos, es decir, cerca de 29 millones por debajo de lo que registra el actual con 65.3 millones.¹

Más aún, independientemente del porcentaje de votos que obtuvo cada uno de los tres principales partidos políticos, en todos los casos, la cantidad de votos absolutos captados por cada uno de ellos fue menor a la obtenida en las elecciones intermedias previas de 1997 (el PRI recogió 2 millones de votos menos, el PAN 100 mil menos y el PRD 3 millones menos).²

Otro dato significativo de esta elección fue el elevado número de votos nulos que ascendió a 920 mil (3.5% del total)³ que, si bien representa a electores que sí asistieron a las casillas, decidieron no favorecer a algún partido o candidato en particular, al igual que en el caso de los abstencionistas. Empero, los votos nulos corresponden a electores que tuvieron que invertir tiempo y esfuerzo para contar con su credencial para votar actualizada —cuya carencia es una razón importante para no participar en los comicios—,⁴ así como para trasladarse a la casilla respectiva a votar, con el propósito de manifestar su rechazo a la oferta política en su conjunto, es decir, se trata de ciudadanos participativos, pero abiertamente inconformes con la convocatoria existente.

Es casi un lugar común afirmar que no hay una explicación única detrás del abstencionismo, pues el fenómeno puede reflejar desde conformidad pasiva con el estado de cosas, indiferencia o desapego, hasta rechazo abierto hacia la oferta política en particular, e incluso hacia el sistema electoral y el régimen de partidos mismo. En todo caso, el distanciamiento de los ciudadanos en ocasión de la renovación de sus representantes populares es un fenó-

1 La cifra del padrón electoral de 1991 es de Gómez-Tagle, Silvia, *Las elecciones de 1991. La recuperación oficial*, México, La Jornada y G.V. Editores, 1993.

2 Datos provenientes de las *Estadísticas de las elecciones federales*, Instituto Federal Electoral.

3 Los votos nulos en 2000 representaron 2.3% y en 1997, 2.8%. *Estadísticas de las elecciones federales*, IFE.

4 De acuerdo con una encuesta nacional en vivienda a abstencionistas, realizada por el periódico *Reforma* el 7 de julio de 2003, 28% de las razones de la abstención fue por falta de credencial actualizada.

meno que refleja un cierto deterioro de la vida democrática. Ya decía Alexis de Tocqueville que la participación de los ciudadanos en las elecciones es la “escuela de la democracia”, por lo que un incremento sensible en la abstención es necesariamente una llamada de atención respecto de la operación de la misma.

En efecto, la participación política es uno de los indicadores de la solidez de una democracia y la participación electoral es su modalidad básica, primaria, no sólo porque el origen del poder está en la voluntad de los ciudadanos expresada en el sufragio, sino además porque la democracia es un régimen incluyente, de puertas abiertas para que los ciudadanos expresen sus demandas e incidan en la adopción de las decisiones públicas. De ahí deriva que la participación política sea una palanca esencial de la legitimación del régimen democrático, pues da cuenta del involucramiento de la población en los asuntos del conjunto de la sociedad que son el ámbito de responsabilidad del poder público.

Si bien la participación de las masas es esencial para la vida de la democracia representativa, existen dos grandes posiciones sobre la cantidad de participación que se requiere: la minimalista, herencia de Joseph Schumpeter, que sostiene que la participación de los ciudadanos se limita a la elección de sus gobernantes y representantes cada cierto tiempo, así como al escrutinio permanente de las acciones del gobierno y, la maximalista, inspirada en Rousseau, que concibe a la democracia como preocupación permanente de los ciudadanos y en la que el activismo es un valor en sí mismo. En todo caso, una democracia todavía en proceso de consolidación o afianzamiento, como la mexicana, requiere que uno de los canales fundamentales de comunicación entre el poder y la sociedad, como es el electoral, se mantenga vivo y activado.

Aunque en la actualidad, las democracias más establecidas han venido experimentando en general un descenso en la participación electoral y ello obedece, entre otras razones, al desvanecimiento de los grandes referentes ideológicos que determinaban los principales clivajes políticos, el abstencionismo cobra significados par-

ticulares en los distintos sistemas políticos y en las coyunturas específicas.

Así como hay múltiples formas de comprender el abstencionismo, también hay una variedad de factores que inciden en éste, en cierto momento político. De tal suerte, es posible identificar detrás del abstencionismo en las elecciones intermedias de 2003 factores eminentemente técnicos, al lado de factores políticos y político-culturales.

II. FACTORES TÉCNICOS DETRÁS DEL ABSTENCIONISMO

Por su propia naturaleza, las elecciones de medio periodo son siempre menos participativas en cualquier circunstancia y latitud, debido a que la oferta política se dispersa en una multiplicidad de candidatos que compiten en pequeñas áreas o distritos electorales, es decir, no hay figuras centrales que encarnen personalmente la disputa electoral. Esta fragmentación de la oferta política impide que el electorado asocie un programa o tema político de campaña con una personalidad específica, capaz de dotar a la elección de cierta dramatización, necesaria para activar cualquier competencia.

Este rasgo distintivo de las elecciones de medio periodo pesa tanto sobre la respuesta de los electores, que su efecto puede palparse en las cifras mismas de participación en los diferentes estados. De tal suerte, de los once estados en donde se registraron los niveles más elevados de participación electoral del país, diez son entidades en las que las elecciones federales coincidieron con elecciones locales (en seis casos se renovaron además de ayuntamientos y congresos locales, las gubernaturas). Las elecciones locales conllevan asuntos de mayor y más directo interés para los ciudadanos, por lo que tienden a atraerlos en un mayor número y, al ser concurrentes con las elecciones federales, suelen elevar la participación electoral (cuadro 2).

Cuadro 2. Abstención electoral por entidad federativa
2003

<i>Entidad federativa</i>	<i>%</i>
Aguascalientes	58.4
Baja California	68.8
Baja California Sur	62.5
Campeche*	38.5
Coahuila	66.9
Colima*	44.9
Chiapas	68.2
Chihuahua	65.2
Distrito Federal*	56.1
Durango	61.7
Guanajuato*	51.0
Guerrero	66.8
Hidalgo	61.5
Jalisco*	45.7
México	63.8
Michoacán	65.7
Morelos*	51.8
Nayarit	62.7
Nuevo León*	46.7
Oaxaca	61.0
Puebla	62.3
Querétaro*	43.1
Quintana Roo	66.5
San Luis Potosí*	55.2
Sinaloa	59.6
Sonora*	47.8
Tabasco	59.1
Tamaulipas	59.9
Tlaxcala	66.6
Veracruz	57.4

Yucatán	50.5
Zacatecas	57.4
<i>Nacional</i>	<i>58.5</i>

* Entidades federativas con elecciones concurrentes.

Fuente: Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, el sector de la población que tradicionalmente acude menos a la convocatoria electoral es el de los jóvenes, precisamente porque se trata de una participación política muy formal y convencional —sólo se realiza en periodos previamente establecidos y para elegir de entre aquellos previamente registrados como candidatos—. Es casi un lugar común afirmar que los jóvenes prefieren la participación política más espontánea y a favor de demandas sociales más novedosas o radicales.

Dado que el crecimiento del listado nominal de electores entre elección y elección se compone predominantemente de los jóvenes que acceden al estatuto de ciudadanos (de los 6.5 millones de nuevos electores registrados entre 2000 y 2003, 5.5 millones corresponden a los jóvenes de 18 a 20 años), la proporción de jóvenes entre 18 y 34 años en el registro electoral de 2003 representó el 46.55% del universo total de electores.⁵ Dicho de otra manera, prácticamente la mitad de los potenciales votantes se ubicaba en la franja de los que históricamente se rehúsan a sufragar.

La movilidad territorial de la población, que en nuestro país alcanza un promedio de 20% anual, es otro elemento que incide en el abstencionismo, sobre todo en una elección en la que solamente se renueva la Cámara de Diputados. Los cambios de domicilio que no son reportados al Registro Federal de Electores colocan a los ciudadanos lejos de la casilla en la que están registrados, exigiéndoles un mayor esfuerzo de traslado para emitir su voto.

Las casillas especiales que se instalan en cada distrito electoral para las personas que se encuentran fuera de su sección electo-

5 Datos del Registro Federal de Electores, IFE, junio de 2003.

ral, solamente pueden ser utilizadas en una elección intermedia por aquellos electores que estén dentro de la circunscripción a la que pertenece su distrito electoral y no en cualquier parte del país, como sí sucede cuando se trata de una elección presidencial.

Para la elección de 2003, todavía un 19% de los electores con credencial para votar se ubicaba fuera de su lugar de residencia registrado en el padrón electoral, fundamentalmente debido a migración interna o externa. Con ello, dichos ciudadanos quedaron a una distancia no siempre remontable de su sección electoral, que es donde está registrado su nombre.⁶

Un factor adicional que debe tenerse en cuenta es que la autoidentificación electoral solamente puede eliminar del padrón, por fallecimiento, a aquellos ciudadanos de los que el registro civil haya tenido conocimiento y exista una acta de defunción. Sin embargo, a través de trabajos de campo, el IFE identificó para 2003 alrededor de 700,000 personas que ya murieron y no existe documentación soporte que permita darlos de baja del registro electoral. Éste es otro factor que contribuye al incremento de las cifras de abstención.

Por último, la amplia cobertura del padrón electoral hoy (94.2% de los mexicanos en edad para votar) no obedece mayoritariamente a la voluntad decidida de los ciudadanos de contar con el instrumento para sufragar, debido a que la credencial para votar es también un documento de identificación ampliamente reconocido. De acuerdo con una encuesta levantada por el periódico *Reforma* días después de la elección, el 45% de los entrevistados señaló que la principal razón por la que había obtenido su credencial de elector había sido para realizar trámites que requerían de identificación oficial, mientras que sólo 20% afirmó haberlo hecho para poder votar en las elecciones. Sólo el 35% restante sostuvo haber solicitado su credencial de elector por ambas razones.⁷

6 De acuerdo con el “Informe final de los estudios realizados por el Comité Técnico del Padrón Electoral”, el nivel de desactualización del padrón electoral era de 18.9%. IFE, mayo de 2003.

7 Vale la pena señalar que los más jóvenes y quienes tienen un nivel de educación por encima de la primaria son los que con mayor énfasis (56% y 49% res-

Este conjunto de factores técnicos apuntan en la dirección de que, al menos una franja del fenómeno de la abstención obedece a cuestiones técnico-jurídicas relativas a la manera como está estructurado el padrón electoral, cuyo principal objetivo es lograr que el mayor número de ciudadanos se inscriba en el listado para favorecer el ejercicio del voto.

III. FACTORES POLÍTICOS DETRÁS DEL ABSTENCIONISMO

El conjunto de factores políticos que se conjugan en una coyuntura comicial inciden en la respuesta de los ciudadanos al llamado de las urnas. La existencia de condiciones equitativas de competencia y garantía de respeto escrupuloso al voto, además del número y perfil de los partidos políticos contendientes, los procesos de selección de candidatos que se llevan a cabo, las estrategias para convocar a los electores que se despliegan y los problemas o conflictos que se generan durante las campañas políticas, son elementos que influyen en el ánimo y las opciones de los electores, alentando o desalentando su participación.

En México, el pasado autoritario y la larga historia de fraude electoral hicieron que la confianza en una autoridad electoral imparcial fuera un primer requisito político-institucional para alcanzar una participación electoral libre y en condiciones competitivas, es decir, genuinamente democrática. Aunque la confianza con que cuenta el Instituto Federal Electoral se debe en primer lugar a la autonomía que tiene conferida y que orienta su actuación, así como a su funcionamiento adecuado, apegado rigurosamente a los dictados de la norma, los propios resultados electorales mostraron que efectivamente la incertidumbre democrática es parte ya del panorama regular de los comicios. La certeza frente a los procedi-

pectivamente) invocan la idea de tramitar la credencial de elector para poder realizar trámites. Encuesta telefónica, "Percepciones ciudadanas sobre la credencial de elector", *Grupo Reforma*, 26 de julio de 2003.

mientos y la incertidumbre frente a los resultados ha ayudado a ratificar la credibilidad de los ciudadanos en la autoridad electoral.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, levantada por el INEGI en febrero de 2003, únicamente los médicos, el Ejército y la Iglesia católica reciben una calificación superior a la del IFE respecto de su grado de confiabilidad (8.2 y 8.1 frente a 7.9)⁸ (cuadro 3). Vale la pena señalar que un estudio previo y posterior a la elección, encargado por la propia autoridad electoral, mostró que la confianza en el Instituto Federal Electoral se incrementó ligeramente a raíz de su desempeño en la jornada comicial, al pasar de un 43.2% de muy alta valoración a un 45.7%.⁹

A pesar de que en 2003 solamente se incorporaron a la arena política tres nuevos partidos políticos nacionales —México Posible, Partido Liberal y Fuerza Ciudadana— ocho fuerzas políticas más contaban previamente con registro, tres de las cuales apenas se habían incorporado tres años antes, aunque sin haber competido individualmente frente al electorado.¹⁰ Dicho de otra manera, el mosaico de organizaciones contendientes en la elección intermedia de 2003 se componía, además de los tres partidos principales, y los dos partidos con cerca de diez años de existencia, pero con niveles bajos de respaldo electoral, de seis nuevos emblemas políticos. O sea, más de la mitad del universo de contendientes era desconocido

8 La Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP II) fue auspiciada por la Secretaría de Gobernación y levantada por el INEGI en febrero de 2003. Los principales datos fueron publicados en la revista *Este País*, septiembre, 2003. La buena calificación del IFE ratificó la registrada por la ENCUP I, www.segob.gob.mx

9 El estudio mostró que la Presidencia es la institución política mejor valorada después del IFE con un 29% de muy alta valoración antes de la elección y un 34.2% después. Véase, *Evaluación de la ciudadanía sobre la imagen, atribuciones y fines del Instituto Federal Electoral*, estudio cuantitativo previo y posterior a la elección de 2003 (resultados preliminares).

10 Cabe recordar que Convergencia, Sociedad Nacionalista y Alianza Social alcanzaron su registro como partidos políticos en 2000, pero participaron dentro de la coalición denominada Alianza por México, encabezada por el PRD.

para el electorado y ello abonó a la dispersión de la oferta política y, seguramente, a hacer más complicado el mundo político.¹¹

Cuadro 3. Valoración de Instituciones
Febrero de 2003

En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto confía en...?

Los médicos	8.2
La Iglesia	8.1
El IFE	8.0
Los maestros	7.9
Los medios de comunicación	7.8
La CNDH	7.8
El presidente	7.5
Las organizaciones sociales	7.5
La Suprema Corte de Justicia	7.4
El Congreso	7.3
Los empresarios	6.9
Los sindicatos	6.6
Los partidos políticos	6.4
La policía	6.2

Fuente: *Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas*, México, INEGI, febrero de 2003.

Cabe señalar también que, de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico *Reforma* al día siguiente de la elección, la razón más socorrida de los que se declararon abstencionistas fue que

11 De acuerdo con los datos de la *Primera Encuesta Nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas*, de 2001, el 55% de la población consideraba, entonces, que la política era extremadamente compleja.

consideraban que existían demasiados partidos políticos (79%).¹² Esta percepción bastante extendida en la opinión pública expresa, sobre todo, un malestar por la gran cantidad de recursos que despliegan los partidos políticos en campaña. Es explicable que el número de partidos se asocie a un mayor flujo de dinero en las elecciones, debido a los elevados montos de financiamiento del 2003; también se entiende que esta circunstancia genere desencanto entre los ciudadanos.

Por otra parte, si bien es cierto que la selección de los candidatos es siempre un momento relevante para la vida interna de los partidos políticos, el incremento que ha tenido la competencia política en nuestro país ha intensificado la lucha interna por las candidaturas. Así, cada vez es más frecuente que los partidos recurran a mecanismos de elección para decidir los nombres de sus abandonados, pues se trata de un mecanismo con una mayor legitimidad democrática, porque la intervención de las cúpulas partidarias deja de ser determinante en esos casos.

En 2003, la gran mayoría de los partidos políticos, incluidos los tres más importantes, optaron por alguna modalidad de selección abierta y directa de candidatos a diputados, ya fuera mediante convocatoria a los propios militantes, como en el caso del PAN, o por consulta a la población en general, como en los del PRI y el PRD.¹³ Al abrir la disputa interna a un pronunciamiento del conjunto de las bases militantes o simpatizantes, se profundiza la comunicación entre los partidos y la población, además de que ésta se extiende más allá del periodo fijado para tal efecto que es el de la campaña. En este sentido, las precampañas pudieron haber alenta-

¹² “Encuesta nacional a abstencionistas”, *Grupo Reforma*, op. cit., nota 7, 8 de julio de 2003.

¹³ Solamente el PVEM, Sociedad Nacionalista, el Partido Liberal, Fuerza Ciudadana, Convergencia y México Posible utilizaron procedimientos indirectos (por vía de delegados) para seleccionar a todos sus candidatos a diputados. El PRI sólo eligió por vía indirecta a seis de sus candidatos, el PAN a 144, el PRD a 259, el PT a 11 y PAS a ninguno. *Datos sobre registro de candidatos*, México, IFE, abril de 2003.

do el interés por los comicios de medio periodo, pero no lograron remontar los factores adversos a la participación.

Un elemento adicional que atrajo la atención pública hacia la selección de los candidatos a diputados fue la disposición legal, aprobada en abril de 2002, sobre las cuotas de género que no solamente exigía que los partidos políticos cubrieran al menos 30% de candidaturas propietarias con mujeres, y en ambos principios —de mayoría relativa y representación proporcional—, sino que otorgaba a la autoridad electoral la facultad para cancelar aquellas candidaturas que no satisficieran dicha proporción de género.¹⁴

Vale la pena recordar que la única salvedad que contempló dicha reforma a la ley fue la relativa a los procesos directos de selección de candidatos de mayoría relativa, donde no existe obligación de cubrir el requisito, justamente porque la decisión es producto de la voluntad de los miembros o simpatizantes del partido en cuestión. Esto explica, en cierta medida, la frecuencia con la que los partidos políticos optaron por dicho método de selección de candidatos. Independientemente de la razón por la que esto ocurrió, la situación constituyó una oportunidad para que las opiniones de al menos una parte de la población fueran oídas, ayudando en principio a acercar a la población al proceso comicial.

No obstante, las precampañas que se sucedieron implicaron un despliegue adicional de recursos que, sumados a los invertidos durante la campaña propiamente dicha, sobre todo en medios electrónicos de comunicación, generaron un impacto negativo sobre el ánimo del electorado. Así, el potencial activador de las precampañas se vio neutralizado por los efectos del despliegue de recursos que conllevan dichas consultas.

En efecto, nunca antes como en 2003 habían sido tan elevados los montos de financiamiento público para los partidos políticos, ya que aunque la fórmula para calcular dicha prerrogativa ha sido

¹⁴ Las disposiciones sobre cuotas de género constituyeron la única iniciativa de reformas en materia electoral que fue promulgada de las 21 que se presentaron después del 2000 y hasta antes de que iniciara el proceso electoral de 2003.

la misma desde la elección de 1997, también lo es que por estar asociada al número de partidos con representación en el Congreso, conlleva un elemento de variabilidad importante, que en esta ocasión fue a la alza.

Dado que como ya lo señalé más arriba, en el año 2000 tres nuevos partidos políticos conservaron su registro y alcanzaron representación en la Cámara de Diputados, el multiplicador del número de partidos, previsto por la fórmula de financiamiento público, se elevó de cinco a ocho, con lo cual el monto de financiamiento público de una elección a otra se elevó automáticamente en más de 50%.¹⁵

El gran volumen de recursos con que contaron, en particular los partidos que ya tenían representación en el Congreso (los de reciente registro solamente reciben 2% de los recursos ordinarios y de campaña asignados a los demás), permitió que su presencia en radio y televisión se desplegara con bastante anticipación al periodo de campaña política que por ley únicamente dura dos meses y medio. Formalmente, es cierto, no se trataba de una campaña electoral, en razón de que todavía no ocurría el registro de candidatos a diputados ante el IFE, que es el acto que da el banderazo de salida, sin embargo, sí implicaba la difusión de propuestas o mensajes de los partidos políticos. Quizás lo más preocupante de esta situación es que los recursos invertidos en la compra de este tipo de espacios en medios, al no insertarse dentro de los periodos de la campaña propiamente dicha, no contabilizan para el cálculo de los topes de gastos de campaña, introduciendo, además, un elemento de inequidad en la contienda.

El reclamo de la opinión pública por los elevados recursos públicos de los partidos, se vio alimentado por la utilización que éstos hicieron de los promocionales en medios de comunicación y, además, por un periodo más largo del previsto para hacer campaña política. Igualmente, cabe tener presente que el contenido mismo

15 En 2000, el monto de financiamiento de los partidos políticos fue de 3 mil millones de pesos, mientras que en 2003 fue de 4 mil 600 millones.

de dichos promocionales, lejos de contribuir a un debate informado y sustantivo, trivializó la contienda, tal como suele suceder con este tipo de mensajes.

Un tema que acompañó al proceso electoral del 2003 y que, sin duda, deterioró la imagen de los partidos políticos, que son los actores centrales de los comicios, fue el de los escándalos suscitados por las denuncias sobre presuntos recursos ilegales en la campaña presidencial de 2000, que popularmente se conocen como Pemexgate y Amigos de Fox.

Si bien es cierto que, en el primer caso, el IFE logró concluir la investigación, identificar la falta administrativa y sancionar al PRI con una multa de mil millones de pesos, es decir, logró hacer justicia, cuatro meses antes de la jornada electoral, en el segundo, la investigación se fue retrasando debido a los obstáculos interpuestos por los propios actores involucrados en la queja. Ello impidió despejar las incógnitas antes del 6 de julio, es decir, saldar las cuentas pendientes, que al involucrar sumas importantes de dinero resultaban especialmente sensibles para la población.

En ese mismo sentido, la multa de 140 millones impuesta al Partido de la Sociedad Nacionalista por utilizar recursos públicos del partido en beneficio de los intereses personales de sus dirigentes, volvió a dar notoriedad al tema de los elevados recursos públicos de los partidos políticos, al comprobarse su utilización abusiva. Todo esto alimentó el descontento de los ciudadanos frente a dichos institutos políticos, que son los actores centrales de las elecciones.

Finalmente, las tensiones que se suscitaron entre el IFE y el gobierno federal con relación a la difusión de la obra pública gubernamental y a la convocatoria a la participación electoral tan sólo unas semanas antes de la elección, interfirieron en el espacio de la recta final de la campaña electoral, que es un momento en que los ciudadanos indecisos sobre la orientación de su voto suelen tomar su decisión. De acuerdo con la encuesta de *Reforma* del 7 de julio,

4 de cada 10 abstencionistas decidieron que no votarían, el mismo 6 de julio.¹⁶

El hecho de que las autoridades estatales ocuparan parte de la escena política en el último tramo de la campaña que debe estar despejada para los actores en contienda que son los que se disputan el favor de los electores, distorsionó el foco de atención, justamente en el umbral de la jornada comicial.

A todo este abigarrado contexto político, es necesario agregar los factores propiamente político-culturales que incidieron en el alejamiento de los ciudadanos de las urnas.

IV. FACTORES POLÍTICO-CULTURALES DETRÁS DEL ABSTENCIONISMO

Si convenimos que las elecciones constituyen un vehículo privilegiado de vinculación entre ciudadanos y el Estado, porque son la forma más común para que las personas expresen sus preferencias políticas, estaremos de acuerdo en que para que se generen condiciones favorables a la participación política es necesario que la democracia esté fuertemente legitimada, es decir, que los ciudadanos tengan una alta apreciación por dicho régimen político.

De acuerdo con una encuesta nacional sobre cultura política en México en 2003, el 60.4% de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo cual representa un incremento en el apoyo promedio otorgado a la democracia entre 1996 y 2002, que según los datos de Latinobarómetro

¹⁶ Efectivamente, el Consejo General del IFE solicitó a los gobiernos federal, estatales y municipales que suspendieran la difusión de su obra pública 20 días antes de la jornada electoral con el propósito de evitar que ello afectara la equidad en la contienda. El gobierno federal accedió a dicha petición, pero a cambio lanzó una campaña de promoción del voto signada y personificada por el presidente de la República, lo cual suscitó un fuerte debate tanto sobre las atribuciones legales del gobierno para hacer dicha difusión, como sobre la pertinencia política de dicha campaña presidencial.

alcanzó el 52.3%.¹⁷ No obstante, vale la pena señalar que la quinta parte de la población —21.6%— se muestra indiferente frente a la democracia, ya que sostiene que en algunas circunstancias, preferiría un gobierno no democrático. Esta cifra representa un incremento de cuatro puntos respecto del promedio registrado en México a través de las series de encuestas realizadas en toda la región de América Latina en los seis años anteriores, es decir, ha decaído el respaldo social incondicional hacia la democracia.

No es difícil entender por qué ha perdido popularidad la democracia en México y en el conjunto de América Latina. Las malas condiciones económicas y las escasas expectativas de mejoramiento en el corto plazo hacia allá apuntan. Es por ello que los niveles de satisfacción con el desempeño de la democracia son sensiblemente más bajos que los relativos a la valoración de la democracia como régimen político.

Así, en 2003, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política (ENCUP II) sólo 23% de la población se considera satisfecha o muy satisfecha con la democracia que tenemos en nuestro país, mientras que el promedio en los seis años anteriores fue de 27%.¹⁸ En todo caso, este dato es entre 30 y 40 puntos porcentuales más bajo que la valoración positiva genérica hacia la democracia, lo cual revela que la población distingue entre el modelo de sistema político deseable y su expresión concreta en la gestión de los gobiernos. No obstante, si los problemas económicos persisten durante cierto tiempo, existe el riesgo de que la insatisfacción por los gobiernos democráticos mine la aprobación del sis-

¹⁷ Los datos del 2003 son de la encuesta nacional *La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México*, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 2003 (datos preliminares). De acuerdo con los resultados de Latinobarómetro, en México, el promedio de indiferencia frente a la democracia entre 1996 y 2002 fue de 18%, en Zovato, Daniel, “Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión comparada latinoamericana, 1996-2002”, *Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México*, México, Miguel A. Porrúa, 2002, p.57.

¹⁸ Los datos de 2003 son de la ENCUP II. El promedio de insatisfacción de 1996 a 2002 proviene de Zovato, Daniel, *op. cit.*, nota 17, p. 60.

tema democrático, deteriorando su fundamentación social y su fortaleza para atajar tentaciones populistas o amenazas de desestabilización.

Si convenimos que las instituciones son las que dan forma a la vida política, en la medida que expresan los principios y las reglas que orientan el quehacer político, los niveles de confianza en ellas dan cuenta del apego que tienen los ciudadanos hacia tales reglas y principios rectores y, consecuentemente, de su disposición a colaborar con dichas instituciones.

De acuerdo con la mencionada ENCUP II, los ciudadanos sienten mayor confianza hacia los médicos, el Ejército y la Iglesia, seguidos inmediatamente del IFE, los maestros y los medios de comunicación, lo que revela una alta valoración por quienes se identifican como prestadores de un servicio a la comunidad, o quienes venden imágenes de una vida ideal. Sin embargo, llama la atención que sólo dos de los seis actores mejor evaluados sean instituciones de Estado: el IFE, que es un órgano autónomo, y el Ejército, que es una entidad bastante alejada de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por el contrario, entre las cinco entidades con más bajos niveles de confianza ciudadana se encuentran, además de la policía, que es la peor evaluada, el Congreso y los partidos políticos, que son ni más ni menos que los actores básicos de la arquitectura de la democracia representativa (cuadro 3).

Esta percepción de la vida institucional explica el manifiesto desinterés por la política, que llega a 36% en términos absolutos, pero asciende a niveles elevadísimos (87%) si consideramos a quienes están poco o nada interesados.¹⁹ Esta indiferencia frente a la política se confirma por el desconocimiento que existe sobre datos esenciales de la política (el 63% desconoce cuánto dura en su cargo un diputado).

19 La ENCUP II señala que sólo 10% de la población se considera muy interesada en la política y 6 de cada 10 encuestados muestran apatía frente a cualquier debate sobre política.

Dicho de otra manera, parece haber una gran consistencia entre la deficiente valoración de las instituciones políticas, la escasa satisfacción con la gestión de los gobiernos democráticos, la falta de involucramiento con la vida política y la elevada abstención del 6 de julio. Sin embargo, si atendemos a los datos de los seis años anteriores, podemos concluir que las manifestaciones negativas hacia la política y las instituciones que son el pilar del andamiaje de la democracia, son más una constante en los últimos lustros que una particularidad de la coyuntura de 2003.

No son, entonces, elementos suficientes para explicar el fenómeno del elevado abstencionismo, aunque sí dan cuenta de que están dañados los canales institucionales de vinculación entre los ciudadanos y el Estado, así como el respaldo de las instituciones convencionales de un gobierno representativo.

Con todos estos datos en mente, considero que, a pesar de lo reciente de nuestra democracia, se vislumbra en el horizonte un cierto desencanto por la misma y, aunque ello no pueda identificarse como causa directa del abstencionismo, sí resulta una suerte de telón de fondo de las urnas semivacías de las elecciones intermedias de 2003.

Las enormes expectativas que se fueron depositando a lo largo de la accidentada transición mexicana sobre el advenimiento de la democracia, explican la impaciencia frente a la falta de resultados concretos, particularmente en el ámbito económico. Ello permite comprender por qué el 59.2% de la población mexicana afirma que un país que no resuelve el problema de la pobreza, aunque tenga elecciones limpias, no es democrático.²⁰

Ese es uno de los grandes retos que enfrentan nuestras democracias latinoamericanas, ya que si sus gobiernos no son capaces de dar respuesta a las enormes carencias sociales que padece la región, difícilmente podrá mantenerse la alta valoración por dicho régimen político.

20 Encuesta “La naturaleza del compromiso cívico”, *op.cit.*, nota 17.